

Editorial

Fetichismo del poder político: el gesto transformista de la 4T

HUMBERTO MÁRQUEZ COVARRUBIAS

El fetichismo se refiere al hecho distorsionado de conferirle a un determinado objeto inanimado funciones sociales que por su naturaleza intrínseca no le corresponden y en consecuencia se le rinde culto a una cosa o se le atribuye un poder que se desprende de quien en sus maquinaciones se lo confirió. En esa inteligencia, el fetichismo del poder consiste en constreñir la política a la esfera del poder político estatal o, más precisamente, al dominio de la política de los políticos profesionales, hasta llegar a desconocer el campo de lo político que está más allá del ámbito del Estado y de su investidura gubernamental, al grado de conferirle un poder supremo a un personaje ungido, que se arroga por su parte la representación popular, la encarnación misma del pueblo, de tal suerte que se nos presenta como la cristalización de «la causa» y el derrotero de una nación descansa en la figura de un hombre fuerte, el caudillo o el mesías.

Asimismo, la noción de hegemonía se convierte en un fetiche cuando, de manera pragmática y oportunista, es reducida a la mera construcción de alianzas entre las más variadas y contradictorias fuerzas políticas y a la configuración de un consenso — así sea mediante la retórica, la propaganda y la demagogia — para favorecer la popularidad del presidente en turno, troquelar la opinión pública e incidir en el ánimo colectivo para aumentar los réditos electorales. Incesantemente, el discurso dirigente pronuncia mensajes alentadores donde, a expensas de los problemas estructurales y la crisis multidimensional, todo está bien, no podríamos estar mejor y el futuro será pletórico si tenemos confianza, sino es que fe, en el gran líder.

Con la personificación irreductible del poder político, la hegemonía se transformará en un fetiche que sirve para crear y reproducir poder estatal. Entonces la política se vacía de contenido y se torna un espacio donde lo que importa es objetivar e instrumentalizar la susodicha hegemonía. El

mundo de la política se transmuta en un mercado donde se intercambia un aparente consenso producido y vendido por el presidente y su aparato de propaganda, que a su vez es consumido por un público masivo, un colectivo pasivo, un espectador que deja de ser ciudadano crítico para convertirse en un adepto, un convencido.

Bajo esta relación, no existe un sujeto político sustancial, autónomo, sino un discurso instrumental que vincula el pueblo al poder o, mejor dicho, la idea de pueblo que se enuncia desde el poder estatal, aquello que el poder unívoco piensa que es su pueblo. Esa política se ejerce como una puesta en escena, un espectáculo mediático, un ejercicio ritual que busca renovar la fidelidad perpetua. Mientras que los acuerdos importantes se tejen tras bambalinas, a las sombras, donde los protagonistas son los aparatos, los dirigentes, los empresarios y los intelectuales orgánicos.

Funciona como una falsa conciencia, porque obstruye toda posibilidad de que el sujeto político autónomo adquiriera conciencia crítica para incursionar en un proceso de politización como clase social o articulación de clases populares o subalternas en pos de la emancipación social. En esa tesitura, el pueblo es construido por el Estado, no preexiste como comunidad política, no está encarnado en la sociedad civil, heterogénea, contradictoria y conflictiva como es. A la medida de sus necesidades, el pueblo como objetivación estatal es una masa proselitista o adherente.

El populismo de izquierdas en su tercera generación pretende quemar etapas y dar un salto hacia adelante. Por ello omite la organización de los desorganizados, y obstruye la formación y concientización de las clases subalternas, la crucial autonomía e independencia del pueblo trabajador, a la sazón el potencial sujeto político colectivo. Ese proceso político de largo aliento lo suplanta con la construcción de una hegemonía a su imagen y semejanza. No se trabaja

en la constitución del sujeto político de la transformación social. Lo que importa es el éxito político de corto plazo, la respuesta a lo inmediato con frases breves, reiterativas, simples; animar el frenesí de la pequeña política, de la política efectista acompañada con una verbosidad fácil, digerible y de ideas cortas para el consumo cotidiano de los medios de comunicación y el aturdimiento de las redes sociales digitales.

El diagnóstico errático o incompleto de la realidad social y política devela el signo ideológico de la autodenominada «cuarta transformación» (4T), cuyo reformismo se subsume en los meandros de la falsa conciencia, con postulados insuficientes sobre los principales problemas estructurales, la concepción del enemigo histórico, la configuración del proyecto de transformación y la formación del agente de transformación social.

Una peculiaridad de la 4T es que identifica a la corrupción como el problema principal del capitalismo mexicano y que alrededor de esa maraña gravitan la violencia y los abusos de poder, por lo que la receta no puede ser otra que extirpar ese mal para resolver los problemas de la nación. El discurso es efectista, pero inexacto. Tales problemas no son sino meros síntomas de los problemas estructurales subyacentes en el funcionamiento sistémico del capitalismo mexicano: explotación, despojo, opresión, pauperismo y precarización, aunado a sus expresiones agregadas de subdesarrollo, dependencia y desigualdad. Al plantear la corrupción como el mal de todos los males, se envía una señal conciliadora donde lo que se pretende es lavar la cara sucia del capitalismo para, a lo sumo, reformarlo y moralizarlo.

En esa tónica, el enemigo social señalado no proviene de la personificación derivada del ejercicio de las funciones capitalistas, en la propiedad y gestión, sino del teatro político donde pululan viejos y nuevos adversarios electorales que disputan los espacios de poder político domeñados por el presidente y sus aliados. Por añadidura, los contrincantes políticos del presidente son la personificación de la corrupción y el conservadurismo, por tanto, los enemigos de la patria. En este bando se identifica a la «mafia del poder», un listado con nombres y apellidos que incluye a políticos y empresarios plegados a los gobiernos neoliberales precedentes. No obstante, es materia de continua especulación la celebración de acuerdos con el gobierno inmediato anterior que supone un inconfesable «pacto de complicidad» para mantener a buen resguardo a determinados políticos que se habrían enriquecido desmesuradamente en el ejercicio de la función pública

pero que fueron expulsados del paraíso estatal, y no se diga de políticos y funcionarios neoliberales y presumiblemente corruptos que oportunamente se subordinaron al candidato y presidente triunfante, en un acto de exorcización moral que depura de toda mácula corrupta a los seres impúdicos, y de ser obstinados enemigos o adversarios, pasan a formar parte de las filas del bien y del poder político hegemónico. De la misma manera, se practica una exculpación de los magnates beneficiarios de los bienes de la nación y del trabajo precario, pero que al sumarse al nuevo gobierno se depuran con el beneficio de seguir siendo lo que han sido, empresarios contratistas del gobierno, pues al ser pasados por el tamiz de la nueva moralidad republicana se asumen como empresarios con ganancias bien habidas.

La configuración del agente de la transformación social también es un asunto problemático. En el imaginario político de la 4T no existe un agente de transformación, porque simplemente no hay un proyecto de transformación. No se concibe ni por asomo un agente político colectivo que realice la revolución social o el cambio social, porque en la ideología del nacionalismo revolucionario, la única revolución concebible ha sido la institucionalizada —valga el oxímoron— y cristalizada en el Estado, donde los que dirigen son la burocracia política, con la singularidad de que los aparatos y ejércitos burocráticos se subsumen a la figura prominente de un solo hombre poderoso, el presidente, que se metamorfosea en un fetiche político, por lo que en su peculiar personalidad encarna al poder político, que ostenta de manera unívoca, además se confunde con el propio pueblo al que dice representar, habla en su nombre, hasta llegar a representar al mítico ser nacional decimonónico, el fiel sentimiento de la patria mancillada. En realidad, se realiza una reconcentración del poder político del Estado y una restauración del presidencialismo que campea sobre un imaginario pueblo bueno, que se quiere uncido al líder, y en medio de los dos aparecen los grandes empresarios, que habrán de invertir, generar crecimiento, dar empleo, propiciar el bienestar, como en los viejos y presentes tiempos neoliberales. Esta es la ideología dominante, donde los empresarios son todo y los trabajadores son nada, porque los trabajadores... sólo trabajan.

La propaganda política es una herramienta central en la construcción artificiosa del consenso, derivado de la legitimidad del voto popular que permitió el ascenso a la presidencia. Por muy novedosa que sea en sus métodos, termina por ser una verbosidad remilgosa plagada de retórica y

demagogia. La conversión de la política en un espectáculo comunicacional, donde se exponen escándalos, se atiza a los contrincantes, se exaltan los logros personales, pero se descartan los problemas de organización y participación de la mayoría y heterogénea composición del pueblo trabajador, se omite la exposición de los problemas estructurales, los desafíos del mundo global contemporáneo y la necesidad de organizar a la mayoría del pueblo trabajador y conectarla con los urgentes cambios culturales, científicos y educativos, sin caer en las redes ideológicas y los estilos personales de gobernar.

El líder carismático que se torna un hombre fuerte, a semejanza de la figura del clásico caudillo político latinoamericano (en remembranza del fenómeno del bonapartismo y cesarismo en la región), propicia el apego de los individuos disgregados y se profundiza y aísla la función política de la delegación por representación, donde más que un «mandar obedeciendo» se desmonta la incipiente organización autónoma de las clases subalternas, y el manto ideológico del régimen cubre la eventual concientización y el ejercicio del poder popular.

El estatalismo es el basamento de la construcción y transmisión del poder de arriba abajo. La cuestión es que se emprende una reducción de lo político a lo estatal. En esa ruta es prioritaria la reconfiguración del Estado y de los mecanismos de control sobre la sociedad civil. La reconcentración del poder político del Estado y su rediseño institucional en torno a la figura presidencial no sólo debilita la pretendida socialización del poder o la construcción de un poder popular, sino que fetichiza el presidencialismo como la instancia de transformación, a la cual se le llega a exigir «obediencia ciega».

En el palacio se concentra simbólica y fácticamente el poder y se diluye la posibilidad de equilibrio entre el ser dirigente y el ser dominante, entre el líder y la masa. Para el presidente potentado, todas las mediaciones políticas entre su investidura y el pueblo estorban. Pese a que su alto cargo republicano se alcanzara merced a una red de organizaciones y movimientos, una vez instalado en el ejercicio del poder presidencial, los movimientos sociales, las organizaciones civiles, los partidos políticos, los sindicatos y los colectivos súbitamente fueron declarados material de desecho. Inclusive el partido triunfante, que fuera el vehículo que permitiera acceder al poder, una vez logrado ese cometido, sufrió un desdén y abandono relativo, puesto que la operación política se asumió como tarea presidencial mediante una instancia

paralela de injerencia político-electoral a cargo de los «superdelegados» y los llamados «siervos de la nación», quienes llevan la buena nueva a los domicilios, empadronan a la población, reparten beneficios de programas asistencia, entre otras labores. En definitiva, la tarea de formación política de clase entre los sectores populares para que adquieran conciencia social, autonomía política y organización en la lucha antagonista no forma parte de la agenda política transformista.

El populismo o el desclasamiento social significa la bancarrota ideológica de las luchas emancipadoras. Se elabora una comprensión transversal de la sociedad, que se salta a la configuración de la estructura social en clases, para suplirla por la figura de pueblo o pobres, según se concibe desde el poder político establecido. El concepto de clases sociales puede ser siempre enriquecido, complementado, para un mejor discernimiento de la realidad social y política, pero su eliminación cancela la posibilidad de cualquier proyecto de emancipación en la sociedad capitalista. La negación de las clases sociales supone el desconocimiento del capitalismo y lo simplifica para entenderlo como un mero modo de producción técnico y economicista, o aún como una forma social que puede estar deformada en su funcionamiento óptimo por obra de la corrupción, la violencia y la falta de valores morales. Como sea, a los trabajadores no se les concibe como una clase social —cada vez más heterogénea, segmentada y dividida— ni mucho menos como un potencial sujeto político colectivo de la transformación social. La cuestión social es la gran asignatura pendiente o negada. No sólo no se hace un estudio de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores, sino que esta problemática y otras colaterales se sustituyen con la cotidiana sobreexposición de las intrigas palaciegas entre las fantasmagóricas fuerzas conservadoras y liberales. 🐝